

Imprimir

Uno de los elementos donde los fundamentos de la democracia se sintetizan es en la concreción al derecho fundamental a la educación. Las realidades del sector educativo a todo nivel en Colombia, desde el prescolar -en nuestra sociedad el lugar donde se nace determinan nuestra trayectoria- hasta la universidad, confirman que nuestro país dista bastante de ser una sociedad donde imperan los principios fundantes de la igualdad, la libertad y la fraternidad.

Este derecho humano, el de la educación, escalera de la movilidad social, una de las características más preciadas de un capitalismo inclusivo, corrobora la enorme disparidad de acceso y de oportunidades que se da en la educación entre los sectores más ricos de la sociedad y los más pobres y entre las regiones.

En el 2021 terminaron su bachillerato 534.178 jóvenes, según el sistema integrado de matrícula, SIMAT. Esta misma cohorte estudiaba en 2018 en octavo grado, año en que se matricularon 729.095 estudiantes. Es decir, del grado ocho al once, abandonaron sus estudios 194.917 jóvenes, a los que el apartheid educativo de Colombia les embolató la vida. Agréguele a esta dramática cifra el que la mitad de los estudiantes que empiezan la primaria no terminan el bachillerato.[1] La deserción universitaria es la mitad de los acceden a un cupo en las universidades. En general, el financiamiento de la educación es absolutamente precario.

El esfuerzo financiero que hacen las familias de clases medias y pobres para que sus hijos accedan y se mantengan en la universidad es mayúsculo. La tenacidad con que los jóvenes- mujeres y hombres- se comprometen con la doble condición de trabajar y estudiar y pagarse de sus magros ingresos la costosa universidad es admirable. Esta osadía juvenil no debería darse. Sin embargo, en el país se celebra esta tenacidad como una virtud cristiana del sacrificio. Las universidades privadas, por sus costos, son imposibles.

Muchas familias y jóvenes comprometen sus ingresos futuros con el ICETEX, convertido en un banco más, sin alma, pero con el espíritu glotón de Luis Carlos Sarmiento, el amenazante banquero,[2] dueño de todo en Macondo, de las aguas llovidas y por llover, de los postes del

telégrafo, de los caminos y de los feudales peajes, con la plata ajena. De ahí la enorme cartera morosa del sistema. O del promocionado programa ser Pilo Paga, que hoy se sabe, muchos pilos han desertado endeudados en más de cien millones de pesos.[3]

Antidemocrático por donde se le mire. Excluyente. Discriminador. Un disolvente social: Los pilos con los pilos, los ricos con los ricos.

Las disparidades regionales confirman el carácter excluyente de la educación en el país. El 72 % de la oferta educativa se concentra en las cinco principales ciudades, especialmente en Bogotá, mientras que en muchas regiones los jóvenes bachilleres no encuentran ni educación ni trabajo. Es decir, se asoman a la vida productiva con una realidad que les niega la posibilidad de insertarse con igualdad de oportunidades en la competitiva e hiperconectada sociedad del conocimiento, con lo cual la pobreza y la desigualdad se reproducen y profundizan.

Una gran universidad para el Magdalena Medio central.

En Colombia, su división administrativa no se corresponde con la realidad del territorio. El caso más emblemático es Puerto Boyacá, un municipio petrolero ubicado en el Magdalena Medio Central donde concluyen, unidos por el río, los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander, Caldas, Tolima, Cundinamarca.

Puerto Boyacá es el único puerto del departamento de Boyacá sobre el río Magdalena. Tunja y Puerto Boyacá son antónimos en todo: en el clima, en la historia, en la cultura, en la economía. Tunja es el frío, la ruana, la guabina. El puerto es el calor abrasador, el poncho, la subcultura del petróleo, la desenvoltura, el vallenato.

Por las disparidades regionales que se reproducen al interior de los departamentos, Puerto Boyacá siempre ha estado relegado en las prioridades de los gobernantes en Tunja. Para los planificadores del departamento, el Puerto es una región especial, mirada con desdén. Hoy sus jóvenes tienen que emigrar de sus orillas para ver de continuar sus estudios superiores. Y lo logran muy pocos. A pesar del petróleo sus habitantes pertenecen en más del 80% en los

estratos uno y dos.

En 2013, Puerto Boyacá aportaba al PIB del departamento el 14.6% PIB, mientras que Tunja solo contribuía con el 11,7%, Sogamoso con el 10.5% y Duitama con el 8,6%.[4] Sogamoso tuvo sede de la UPTC desde 1972 y Duitama desde 1973. En medio de sus dificultades financieras, la UPTC hace esfuerzos, en alianza con la gobernación, medio siglo después, por abrir una sede absolutamente insuficiente para atender incluso la demanda de los estudiantes del Puerto. La pequeña sede solo ofrecerá cupos para cuatrocientos estudiantes y los bachilleres que produce anualmente el sistema educativo local son más del doble.

Y mucho menos para atender la demanda de Puerto Triunfo, Puerto Perales, Puerto Nare y la Sierra, en Antioquía, de Cimitarra, en Santander, incluso de Otanche en Boyacá, poblaciones todas que quedan más cerca del puerto boyacense que de sus respectivas capitales. Una masa estudiantil que puede llegar fácilmente a treinta, cuarenta mil estudiantes en menos de diez años.

La región merece de manera urgente una gran universidad regional que contemple la diversidad del territorio, la realidad socioeconómica de la región, las necesidades del sector productivo, la potencialidad económica de la región desde el punto de vista del cambio de la matriz energética, de la necesidad de afianzar la paz en una región azotada por la violencia lo que también le abriría paso a las enormes posibilidades del turismo. Bogotá, Medellín, Ibagué, Manizales, Bucaramanga van a quedar a dos o tres horas del Magdalena Medio Central. Un mercado de diez millones de personas.

El fortalecimiento de las Universidades del Pacífico colombiano.

El litoral pacífico es una de las regiones más pobres de Colombia, con numerosas poblaciones dispersas cuyo único modo de comunicación es el río y el mar, lo que hace que el transporte sea muy caro; con una biodiversidad de importancia mundial desaprovechada como secuela del atraso general de la nación y de la guerra colonial contra las drogas. Para los estudiantes que terminan su bachillerato es muy difícil, en las actuales condiciones, su acceso a la

universidad con lo cual se quedan enredados en el círculo de pobreza en la que nacieron sin ninguna posibilidad de movilidad social. Esta la encuentran en el narcotráfico y en la violencia.

Los profesionales que desean continuar sus estudios de posgrado hacen enormes esfuerzos económicos cuya inversión no tienen retornos adecuados por la debilidad de sus economías. En lo fundamental, el único empleador es el Estado. Pensar en una Universidad para estos jóvenes es de urgencia estratégica para quitárselos a la violencia. Y tiene que ser una Universidad que tenga en cuenta esta característica de la región: con auxilios de transporte, alojamiento y comedores universitarios. Fortalecer sus centros de investigación para encauzarlos hacia el aprovechamiento científico y económico de las plantas mágicas que se siembran en su territorio o se trasiegan en él, con la cual se transformaría la guerra contra las drogas en oportunidades de desarrollo y paz.

Solo así el sistema educativo lograra retenerlos. Esto requiere el fortalecimiento, en todos los órdenes de las universidades regionales existentes: Universidad del Chocó, Universidad del Valle en sus sedes de Cali y Buenaventura, la Universidad del Pacífico en la misma ciudad, las universidades del Cauca y Nariño y la Universidad Nacional, sede Tumaco.

En general este cuadro descrito esquemáticamente es el legado fundamental de la economía excluyente que ha prevalecido en Colombia en el sistema de la educación y especialmente en la educación superior. Los avances han sido muy lentos, pocos, insuficientes. De ahí el tamaño del desafío del gobierno entrante que pretende insertar la sociedad colombiana en la sociedad del conocimiento, hacer de la educación el eje del cambio hacia una economía para la vida. El reto es descomunal para un hombre de excepcionales condiciones humanísticas, profundamente liberal: Alejandro Gaviria, el ministro de educación designado por el gobierno del Pacto Histórico que empieza el siete de agosto de 2022.

---

[1] *Cerca de la mitad de los estudiantes en primaria no termina su bachillerato*, El Tiempo, 10

de julio de 2022, Pág.1.7

[2] *Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo.* Sarmiento Angulo contra Petro. El Colombiano, 8 de julio de 2022.

[3] *Ser Pilo Paga: un programa que se convirtió en una deuda impagable para más de cuatro mil pilos,* El Espectador, 25 de junio de 2022.

[4] *Boyacá: un contraste entre competitividad, desempeño económico y pobreza,* Documentos de trabajo sobre economía regional No 245, Bogotá 2016, Banco de la República, Pag.2.

Fernando Guerra Rincón

Foto tomada de: El Diario Boyacá